

RECURSO

Interpuesto por Don Santiago Vicario contra la sentencia de 19 de Noviembre próximo pasado que pronunció el Tribunal de Circuito, en las actuaciones formadas con motivo del interdicto de despojo, que el albacea de la testamentaria de Don Pedro Piñeyro promovió contra el mismo Vicario.

PEDIMENTO DEL PRIMER MAGISTRADO
SUPLENTE DE CIRCUITO.

Puebla de Zaragoza, Noviembre 19 de 1873.—Vistos: la demanda que con el carácter de interdicto posesorio, interpuso D. Joaquín de Haro y Ovando, como albacea dativo en la testamentaria del canónigo D. Pedro Piñeyro, el 11 de Julio de 1862; los atestados que se acompañaron á dicha demanda; el auto de 17 del mismo mes y año; el expediente instruido en la Jefatura Superior de Hacienda, con motivo de la denuncia hecha en aquella oficina por el Ciudadano Santiago Vicario; el auto en que se mandaron intervenir las casas objetos de la denuncia (fojas 2 del cuaderno principal); lo expuesto por el Ciudadano Frances Alfredo Lerong, (fojas 28 del mismo cuaderno); la providencia judicial que denegó la entrega de autos para el artículo sobre la intervencion de las fincas (fojas 29 vuelta); las pruebas aducidas por el demandante en la primera instancia; los alegatos; la sentencia pronunciada por el Juez primero de lo Civil el 26 de Julio de 1864, (fojas 52 vuelta); la apelacion interpuesta por el reo; su admision en esta instancia; el artículo sobre declinatoria de jurisdiccion, cuya sentencia definitiva declaró competente á este Tribunal para conocer de este juicio; la reserva que el mismo hizo para designar en definitiva; el lasto de costas causadas en aquella cuestion; las pruebas aducidas en esta Superioridad por el apelante; lo expuesto por

el Sr. Lerong (fojas 29 vuelta del Toca) y en cuya diligencia se desistió de continuar en la instancia, dando por bueno y ratificando lo que hiciera el Ciudadano Vicario; los apuntamientos presentados por las partes; el acto de la vista; la acta de fojas 41 de este Toca, en cuyo tenor aparece la denuncia á desistimiento que en toda forma hizo el C. Promotor, apartándose del juicio en la citacion que se le hizo por solicitud del reo y aquiescencia del actor; la oposicion de este á dicha pretension y lo demas que fué conveniente ver.

Considerando: que si bien la compilacion de leyes patrias conocidas con el nombre de Reforma, produjo no solo una revolucion social, sino ademas, la nueva forma en sus procedimientos, diversa de la del derecho comun; esto no obstante, por las reglas generales del mismo derecho, sin destruir en nada los privilegios de la aplicacion de aquellas, quedaron vigentes las del antiguo, en lo que no se opusieran al novísimo.

Que las operaciones de nacionalizacion, siempre que se trate de bienes comprendidos en la ley de 12 de Julio de 1859, fueron cometidas por varias disposiciones al Supremo Gobierno y á las oficinas de Hacienda en los Estados; procediéndose gubernativa y sumariamente y sometidas á las autoridades federales, solo en el caso de ser controvertibles los derechos.

Que por estas bases generales, la cuestion entre el C. Vicario con el albacea de la testamentaria del canónigo D. Pedro Piñeyro y Osorio, debió conocer de ella el Juez de Distrito de este Estado, para caracterizar la verdad ó falsedad de la denuncia que aquel había hecho sin atribuir á tal litigio el carácter de interdicto que propiamente no tiene, bajo el sistema constitucional en íntimo enlace con las leyes de Reforma.

Que es ya histórico el fatídico interregno que sufrió la República, cambiando radical, aunque de un modo ilegal y violento sus instituciones por las que se intitularon imperiales, y fué un hecho en aquella funesta

época, la supresion de las autoridades federales emanadas de la Constitucion general, y de aquí la instalacion de simples jueces ordinarios con las atribuciones que les daban las disposiciones vigentes en aquella vez.

Que el Supremo Gobierno Nacional, sin duda por los males que eran consiguientes á la sociedad, dió subsistencia á los actos de las autoridades judiciales establecidas bajo el amparo del llamado imperio, si las partes se habian conformado con las providencias de aquellas; dejando como dejó, expeditos los recursos legales.

Que tales circunstancias excepcionales constituyen la razon total de haberse sustanciado el juicio con carácter de interdicto y no el juicio sumario que las leyes de Reforma previenen para la depuracion de las denuncias.

Que tales precedentes impulsan á examinar si hubo en efecto el hecho en que se apoyara el actor para enderezar su accion, en los términos que lo verificó.

Que bajo el aspecto de derechos posesorios, es indispensable fijar los puntos siguientes: buena fé, justo título y el año y día de posesion, requisitos que debe tener todo poseedor, para que se le imparta la proteccion legal que impetere.

Que en el caso presente, desde que la Gefatura Superior de Hacienda dejó al denunciante expedito para defender sus derechos, sin afrontar la responsabilidad de las consecuencias que surgieran del sostenimiento de aquellos, incumbió á los deberes del denunciante, el comprobar la exactitud de los asertos en que apoyaba la adquisicion que pretendía.

Que el contesto literal de aquellos fué bajo el concepto preciso de suponer legadas las fincas por el finado canónigo Don Fernando Aviléz á la Congregacion de San Vicente de Paul, no haber pagádose la pension con que estaban grabadas aquellas, como de manos muertas por una ley que no recordaba el denunciante y pretendiendo su adquisicion con arreglo á la ley de 12 de

Julio de 1859 (expediente instruido en la Gefatura de Hacienda).

Que en vigor de derecho, el título justo con que pretendía poseer el denunciante, postergando al antiguo poseedor, no fué mas del que la ley citada de 1859, le atribuía si resultaba cierta la denuncia.

Que ni aun en la Gefatura se comprobó esta, supuesta la frase *de declinar la oficina toda responsabilidad*, entregar las casas denunciadas al pretendiente y á su perjuicio por no estar bien probada la denuncia, y ademas, la salvedad que el Ministro de Hacienda hizo de los derechos que asistirán al albacea contra la redencion hipotética á que se procedió.

Que en el término probatorio del juicio sumario, el actor probó con un instrumento público que merece toda fé, pues que es el testamento del finado canónigo D. Fernando Aviléz, haber sido las casas denunciadas del testador, despues, de el tambien canónigo Piñeyro, como heredero de aquel, y despues de su testamentaria, comprobándose tambien á mayor abundamiento con la prueba testimonial.

Que la escritura pública otorgada al C. Vicario, aunque instrumento público y por la que compraba las fincas; fué bajo el supuesto de ser exacta la denuncia, según que en tal sentido se insertaron las cláusulas terminantes que así lo expresan, y habiendo claudicado la referida denuncia, claudicó tambien el título de la adquisicion.

Que si entre las prescripciones sacramentales que sirven de norma á los jueces para sus providencias, se enumera como mas principal la del versículo *Secundum alegata et probata*, tal prescripcion obliga á aquellos á sentenciar, con sujecion á la materia que aparece comprobada y nunca por sus inspiraciones individuales y arbitrarias.

Que las precedentes aseveraciones, surgen de las constancias de autos engendrando una prueba plena y convenciendo hasta la evidencia de no ser poseedor propiamente

el denunciante de fincas pertenecientes á propiedad particular hasta aquí comprobada.

Que si bien bajo tales auspicios debió devolverse la posesion al que se le perturbó en ella, atentos los terminantes preceptos del derecho, en el curso del juicio y á su fin se advierten irregularidades ó omisiones que la práctica y las leyes no permiten; pues que se omitió el sustanciar por cuerda separada el artículo sobre intervencion y la fianza que debió haber otorgado el que obtuvo, por cuanto en la misma práctica se sigue la regla de los juicios ejecutivos dándola quien obtiene, aun en los juicios de alimentos, por solo la posibilidad que hay de que se revoque en segunda instancia, lo determinado en la primera.

Que respecto de lo primero, hubo un auto consentido que causó ejecutoria, y de lo segundo, no se siguió con oportunidad, y de aquí dejar á salvo los derechos del apelante para que los haga valer en forma y conforme á derecho.

Que en efecto, es cierto que las oficinas de Hacienda por disposiciones antiguas y modernas tienen la facultad de intervenir las fincas que reportan alguna responsabilidad; ya se trate de contribuciones, ya se consideren como afectas á la nacionalizacion.

Que las nuevas escepciones opuestas en esta instancia por el apelante, si bien envuelven otra nueva denuncia, respecto de las fincas en cuestion, no es posible considerarlas; ora porque las disposiciones vigentes sobre tramitacion, lo prohiben terminantemente, ora porque en las instancias ulteriores á la primera nada debe innovarse circunscribiéndose á lo actuado y versado en esta para reveerlo, y ora por la oposicion terminante de la parte contraria, á que se aprecien los nuevos datos que se suministran, para calificar si es ó nó censo eclesiástico el que envuelve la institucion de la alma del difunto canónigo Piñeyro: "*Tantum possumus quantum jure posumus*;" en los cuasi contratos que celebran los litigantes en los juicios: debe haber perfecta igualdad

lo que se concede al actor se le concede al reo, y al contrario, y así como no es lícito al demandante cambiar su accion en la segunda, del mismo modo al reo.

Que cuando como ahora los nuevos artículos son diversos de los versados en la primera, no es lícito considerarlos: (Curia Filípica, Página 249 Par. tercero de agravios, citando la ley 29 título 16 partida tercera). "*Tantum devolutum quantum appellatum*;" "*Tantum appellatum quantum cognitum*;"

Que si en los estrechos límites del juicio posesorio, supuesta la insubsistencia de la denuncia que fué objeto de la breve contension que allí se versó, no es posible ocuparse de las nuevas cuestiones, queda al apelante el recurso del juicio plenario ó de propiedad.

Que la confirmacion de la sentencia en que se declaró competente á este Tribunal para conocer del presente negocio, convence de la improcedencia é injusticia con que se entabló la declinatoria de jurisdiccion.

Que por lo que respecta á lo solicitado por el C. Promotor, este funcionario no es parte en el juicio, lo hizo despues de citados los verdaderos litigantes, y si bien mira al oficio del Juez el recibir por vía de instruccion, sin atender á las sutilezas del derecho, cuanto crean las partes que pueda ilustrarlos; despues de la citacion y conclusos los autos para definitiva, lo prohiben terminantemente las leyes primera, título catorce, libro once, tercera, título 15 del mismo libro de la N. R. y el artículo 75 de la ley de 4 de Mayo 1857, razon legal por lo que no se tomó en consideracion la solicitud: que aún en la hipótesis de ser cierto que las casas pertenezcan al Hospital, no era oportuno ni hábil el tiempo en que se anunciaba tal afeccion, y ella es diversa en un todo de la redencion que se intenta sostener.

Por tales consideraciones de hecho y de derecho, este Tribunal en grado de apelacion, debia confirmar y en efecto confirma, por sus propios y legales fundamentos la sentencia restitutoria pronunciada por el

Juez primero de lo civil el 18 de Julio de 1864, (fojas desde la 46 hasta la 51 del cuaderno principal), no debiendo lastar al apelante las costas que se causaron en cuatro meses de la intervencion decretada por la Gafatura, atentas las facultades legales y ordinarias de esta oficina; pagando el apelante las costas legales causadas en esta instancia, en justo acatamiento de las leyes segunda, tercera y cuarta, título diez y nueve, libro once de la N. R., y exceptuándose las del artículo de competencia que pagará la parte promovente. Quedando á salvo todos los derechos del apelante así como los del Hospital de San Pedro de esta Ciudad, para que los ejerciten en toda forma en el juicio respectivo y ante la autoridad competente. Hágase saber y una vez terminada la tramitacion, pase este expediente al C. Lic. Emilio Alvarez, para que con arreglo al arancel vigente en el Gobierno federal, proceda á tasar las costas que ha devengado el suscrito. Así definitivamente juzgando, lo mandó el primer Magistrado suplente, por ante mí de que doy fé, disponiendo tambien se mande copia de esta sentencia á la Suprema Corte para su publicacion.—*José María Cantú.*—*Felipe de J. Almazán*, secretario.

*Sentencia del segundo Magistrado
suplente de Circuito.*

Puebla de Zaragoza, Abril 26 de 1873. Vistos estos autos formados en virtud del juicio promovido por D. Joaquin de Haro, como albacea del canónigo D. Pedro Piñeyro y Osorio, contra D. Santiago Vicario por despojo de unas casas; el recurso de nulidad interpuesto por el demandado acerca de la sentencia definitiva pronunciada en 23 de Noviembre del año próximo pasado por el C. Magistrado primer suplente de este Tribunal, fundándose el peticionario en que no se resolvió previamente el artículo inicia-

do por el C. Promotor fiscal, con relacion á lo que expuso á fojas 41 vuelta: "De que los bienes que se cuestionaban en el presente juicio, pertenecian al Hospital de San Pedro, por los comunicados secretos del Sr. Piñeyro, como lo podria certificar el escribano D. Juan Pedro Necoechea que tuvo conocimiento de ellos," así como porque la sentencia se ha pronunciado en el negocio principal sin fallar el artículo indicado, lo cual consta á fojas 5 vuelta de este Toca, en el ocurso presentado por el apoderado del quejoso, quien igualmente recusó al indicado primer Magistrado suplente, quien dándose por recusado mandó pasar el conocimiento al suscrito, y habiéndose mandado correr traslado á la parte del Sr. Haro, fojas 52 vuelta y 53, manifestó lo que al derecho de su representacion le convenia; el acto de la vista para el que previamente se citó á los interesados y al que solo se presentó el abogado patrono del Sr. Haro, quien exhibió en fojas 4 su respectivo informe, habiendo renunciado la parte contraria ese acto; pero protestando presentar sus apuntamientos oportunamente; y lo contestado por el C. Promotor fiscal á fojas 55 vuelta, renunciando la vista por los motivos que ya tiene manifestados de no considerarse parte en este juicio.

Considerando, primero: que no ha podido ni debido dársele entrada á la indicacion que someramente le toca al Promotor, sobre esos comunicados del Sr. Piñeyro, ya porque lo hiciera extemporáneamente, supuesto que el término probatorio habria expirado y porque en el estado de citarse ya para definitiva no podria articularse, y tampoco volver á abrir á prueba unos autos conclusos, como porque el Promotor ha estado diciendo no se tenga como parte en este negocio.

Considerando, segundo: que segun el tenor literal del artículo 83 de la ley de 4 de Mayo de 1857, no hay mérito para advertir que en manera alguna haya violado ninguna de sus prescripciones y atendiendo á

los ningunos fundamentos en que se apoya el C. Vicario para haber interpuesto el recurso de nulidad, se declara: Primero: que se desecha desde luego el recurso de nulidad por ser improcedente. Segundo: que las costas de este incidente sean pagadas las comunes, por mitad, y cada uno las suyas particulares. Tercero: que al hacerse la regulacion de costas, tendrá presente el tasador lo fallado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, segun consta á fojas 18 y 19 de este Toca, en lo que hace relacion á las costas del negocio principal. Hágase saber y practicadas todas las notificaciones, pase este toca al Lic. D. Pablo Herrera, para que con arreglo al arancel vigente en el Gobierno federal proceda á hacer la tasacion de costas. Así definitivamente juzgando lo mandó y firmó el C. Magistrado segundo suplente del Tribunal Superior de Circuito.—Doy fé.—*Lic. Fernando Barroeta*.—*Felipe de J. Almanza*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 29 de 1873. Vistos: el recurso de nulidad denegada interpuesto por D. Santiago Vicario contra la sentencia de fecha 19 de Noviembre próximo pasado que pronunció el Tribunal de Circuito en las actuaciones formadas con motivo del *interdicto* de despojo, que el albacea de la testamentaria de D. Pedro Piñeyro promovió contra el mismo Vicario; el testimonio de las constancias conducentes que señalaron las partes; lo alegado al tiempo de la vista por el Sr. Lic. D. Manuel Inda en representacion de la parte de Vicario que estuvo presente en la misma audiencia; lo que expuso igualmente el Sr. Lic. D. Esteban Calva por la testamentaria de D. Pedro Piñeyro, y considerando: que la parte de Vicario interpuso el presente recurso alegando que: “estando para resolverse un

artículo previo, ya sustanciado, el Tribunal de Circuito falló en lo principal no obstante estar pendiente aquella articulacion y haber trascurrido el término dentro del cual debía pronunciarse la sentencia.” Considerando: que de las constancias de autos no aparecen justificadas legalmente las causas de nulidad que alegó como tales en las palabras anteriores, el patrono del promovente; pues la simple indicacion que hizo el Promotor fiscal al darse por citado para sentencia, no constituye la interposicion en forma de un artículo judicial de previo y especial pronunciamiento de derecho, ni el tiempo dentro del cual se pronunció la sentencia, excedió del término legal que debe contarse, conforme á lo prevenido en la última parte del artículo 174 de la ley de 4 de Mayo de 1857: apareciendo en consecuencia, que no se han violado las leyes que arreglan el procedimiento en los casos determinados por la citada ley de 4 de Mayo de 57, y considerando, por último: que aun en el supuesto de que fuesen verdaderas causas de nulidad las opuestas contra la repetida sentencia de segunda instancia, el recurso de nulidad no procede ni jamas ha procedido en los juicios sumarísimos como el de que se trata, conforme al tenor de la parte final del artículo 139 de la ley de 23 de Mayo de 1837 y á la enumeracion y limitacion de casos establecidos en el artículo 83 de la referida ley de 4 de Mayo de 1857.

Por las consideraciones expuestas, y por los propios legales fundamentos del inferior, debia confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada el 26 de Abril próximo pasado por el Tribunal de Circuito de Puebla, declarándose: Primero: Que no procede el recurso de nulidad denegada interpuesto por D. Santiago Vicario en los autos relativos al *interdicto* despojo, que contra él promovió el albacea de la testamentaria de D. Pedro Piñeyro. Segundo: Conforme á lo prevenido en el artículo 82 de la misma ley de 4 de Mayo de 1857, se condena á ir

parte de Vicario en las costas de este recurso, cuyo cobro proceda conforme á la Constitucion federal. Hágase saber á las partes, y con su respuesta dése cuenta.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—Por ocupacion del C. Secretario, *Manuel Fernandez Villareal*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, 20 de Enero de 1874.—*Lic. Manuel Fernandez Villareal*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Florentino Cervantes, contra el Gefe Político de Salamanca, que se ha negado á ponerlo en libertad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que Florentino Cervantes promovió en 3 de Mayo del presente año, el recurso de amparo contra la Gefatura política de Salamanca, quejándose de que en su persona se estaban violando las garantías individuales consignadas en los artículos 13, 16, 18 y 20 en sus fracciones 1ª, 2ª, 4ª, 5ª y 21 de la Constitucion federal. En el escrito de queja se hace consistir la violacion de los artículos citados, en que el quejoso por el único hecho de haberse sublevado contra el Supremo Gobierno, tomando participio en la revolucion iniciada en San Luis Potosí, é indultado por este delito, fué juzgado como salteador y plagario y condenado á la pena de muerte. La H. Legislatura del Estado lo indultó de esta

pena, que fué conmutada en la de diez años de prision que actualmente extingue en la Penitenciaría de Salamanca. Promulgada la ley de amnistía de 27 de Julio del año próximo pasado, ocurrió al Gefe político de Salamanca, solicitando ser puesto en libertad por estar comprendido en el artículo 2º de dicha ley, á cuya solicitud no se acudió por no constar que el delito que habia motivado la prision fuera un delito político y porque la Penitenciaría de Salamanca depende del Gobierno del Estado.

El informe de la autoridad designada como ejecutora en este juicio, se refirió únicamente á estos último hechos, por lo que fué preciso recibirlo á prueba, en cuyo término á solicitud del actor se agregó el testimonio de la acta que contra él instruyó el C. T. nimento Coronel Cesilio Estrada. Aparece de las constancias de esta acta, que Florentino Cervantes fué juzgado y sentenciado por los delitos de plagio y asalto, los que no pertenecen al órden político y de los que no habla la ley de 27 de Julio de 1872. La ley de 9 de Abril de 1870 que normó los procedimientos de la causa instruida contra el quejoso, suspendió exclusivamente para los salteadores y plagarios las garantías individuales invocadas en el presente recurso, y en concepto del que suscribe, las diligencias de dicha causa suministran datos bastantes para considerar á Florentino Cervantes como plagario y salteador, y en consecuencia para asentar que, en la época en que fué juzgado y sentenciado, no disfrutaba de las garantías individuales que ha invocado en este recurso.

Por las razones expuestas, el Promotor fiscal pide se sirva el Juzgado denegar el amparo de la Justicia de la Union que solicita Florentino Cervantes.

Guanajuato, Julio-14 de 1873.—*José Aguilar y Córdoba.*